

EL TEMA ENERGÉTICO EN EL ÁREA ANDINA

Farid Kahhat Kahatt

Profesor del Departamento de Ciencias Sociales PUCP

Atribuir al régimen venezolano designios imperiales sobre el conjunto de Sudamérica solo puede ser producto de un error de perspectiva. Implica ignorar, por ejemplo, que la economía venezolana representa poco más del doble que la economía peruana, pero alrededor de una séptima parte de la economía brasileña. Se trata además de una economía basada en la exportación de un solo producto: el petróleo. A su vez, ese dato revela los alcances de las aspiraciones políticas del gobierno venezolano en la región, pues donde realmente tiene puesta la mira es en la región andina y, en particular, en aquellos países que cuentan con excedentes exportables de combustibles fósiles (verbigracia, Bolivia, el Ecuador y el Perú). Ello se debe a que, a diferencia del viejo populismo, que contaba con un proyecto de desarrollo basado en la industrialización por sustitución de importaciones, el nuevo populismo solo cuenta con el gas y el petróleo como instrumentos de negociación política y gestión económica.

Pero al asumir un mayor control de sus recursos energéticos, los países del área andina no se están comportando de manera distinta de aquellas monarquías conservadoras del Golfo Pérsico que, enfrentadas a un incremento exponencial del precio del petróleo hacia mediados de la década de 1970, decidieron expropiar la mayor parte de la industria energética afincada en su territorio. En otras palabras, las decisiones de los gobiernos de Venezuela y Bolivia en esta materia se deben solo en parte a su orientación ideológica. Esas decisiones se deben, además, al poder de negociación que les concede un incremento exponencial en el precio de los hidrocarburos durante el último lustro. Esa es la razón por la que la masiva renegociación de contratos por parte del gobierno venezolano tiende a pasar desapercibida, precisamente porque la mayoría de compañías acepta los nuevos términos propuestos por el Estado.

Prueba de que no estamos únicamente ante una expresión de las preferencias ideológicas de los gobernantes de turno es el hecho de que el mismo gobierno ecuatoriano que inició negociaciones para suscribir un tratado de libre comercio con Estados Unidos es ahora el que rescinde los contratos de explotación petrolífera de una empresa estadounidense (verbigracia, la Occidental Petroleum Company). El régimen ecuatoriano alega que se trata de una medida excepcional debida a un incum-

plimiento contractual por parte de la compañía, pues en el 2000 esta vendió parte de sus operaciones en el país a una empresa canadiense, sin buscar primero la aprobación gubernamental. Dos hechos sugieren, sin embargo, la posibilidad de que esa decisión se imbrique con procesos similares que están en curso en la región andina. Por un lado, el que, como consecuencia de esa decisión, el gobierno de Estados Unidos haya suspendido las negociaciones con el Ecuador tendientes a suscribir un tratado de libre comercio, lo cual se produce cuando el gobierno ecuatoriano se encontraba bajo la presión concertada de diversos movimientos sociales que buscaban impedir la suscripción de ese tratado –algunos de esos movimientos proponían además la rescisión del contrato con la Occidental–. Por otro lado, funcionarios del gobierno ecuatoriano dieron a conocer que este contempla la posibilidad de que, en lo sucesivo, la compañía estatal PetroEcuador, en asociación con una empresa estatal sudamericana, explote los yacimientos amazónicos que operaba la Occidental. Pocos días después, Hugo Chávez visitaba el Ecuador para suscribir acuerdos de cooperación energética entre PetroEcuador y la empresa estatal venezolana Pedevesa.

En cuanto a la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar sus recursos energéticos, esta puede analizarse en varios niveles. En el nivel de procedimientos, la decisión se adoptó –y aplicó– *manu militari* y por decreto, sin el trámite de un mínimo escrutinio público –por ejemplo, a través de un proyecto legislativo, como se hizo en Venezuela– o de una negociación entre las partes. Aquí cabría recordar que las principales afectadas no son las transnacionales privadas sino empresas que, como Repsol y Petrobras, están bajo el control de gobiernos socialdemócratas (verbigracia, los de España y Brasil, respectivamente) con los que, presumiblemente, Bolivia desea mantener buenas relaciones.

En cuanto al contenido de la medida, en los grandes yacimientos esta otorga al Estado el monopolio de la comercialización, y eleva su participación en el valor de venta del producto hasta un 82%. En el caso de las empresas con montos de producción menores, expropia para el Estado una mayoría absoluta de las acciones. Las empresas involucradas tienen 180 días para aceptar las nuevas condiciones o, en su defecto, abandonar el país. En caso de que esas empresas decidan abandonarlo, un

país que, como Bolivia, cuenta con un PBI menor que 10.000 millones de dólares no tendría cómo cubrir los 3.000 millones de dólares que aquellas han invertido en él. Es probablemente en ese punto en el que entraría a tallar Pedevesa.

En las negociaciones que se iniciaron tras la decisión de nacionalizar los hidrocarburos, el interés inmediato del gobierno boliviano es conseguir un incremento en el precio de venta del gas a la Argentina y el Brasil, mientras que el interés fundamental de estos gobiernos es el de garantizar el abastecimiento del combustible que obtienen de Bolivia. El tema es particularmente sensible para el Brasil, que importa de Bolivia 50% de su consumo de gas. Ese es, por lo demás, solo uno de los temas que le interesan al gobierno brasileño en esta materia. Sigue pendiente una negociación sobre los intereses de Petrobras en Bolivia. En este tema, mientras Lula mantiene una diplomacia de bajo perfil, José Sergio Gabrielli, presidente de Petrobras, embiste con la espada desenvainada. Su primera reacción frente a la decisión del gobierno boliviano fue anunciar que Petrobras no

invertirá ni un centavo en Bolivia hasta que se resuelva en forma satisfactoria el *impasse* actual. Añadió luego que el Brasil había cometido un grave error al depender en una proporción tan alta de los suministros de gas boliviano, deslizado la posibilidad de que en el futuro su país diversifique sus fuentes de abastecimiento, lo cual constituiría una decisión política antes que económica, en tanto pondría la estabilidad de sus fuentes de suministro por encima del precio de venta.

Probablemente, el factor más polémico en la decisión de esos gobiernos sea la presunción implícita de que si un recurso es puesto bajo control del Estado, este será empleado en beneficio de la nación. Pero allí donde el Estado no cumple cabalmente sus funciones más elementales, no queda claro por qué estaría en condiciones de asumir con eficiencia funciones adicionales. Sobre todo cuando, dadas las circunstancias (verbigracia, control sin competidores de un recurso cuyo precio internacional alcanza un nivel superlativo), no tendría mayores incentivos para hacerlo. ■

HUGO CHÁVEZ, ¿POPULISMO O SOCIALISMO DEL SIGLO XXI?

Luis F. Popa Casasaya

Profesor del Departamento de Ciencias Sociales PUCP,
analista internacional y ex diplomático cubano.

Una introducción necesaria

El presente trabajo no tiene pretensiones académicas sino es más bien un intento por observar lo que está sucediendo en Venezuela. Pasiones y desencuentros en una sociedad sudamericana que se siente caribeña, que tiene al béisbol como religión y la salsa como vocación.

La congresista y destacada lingüista peruana Martha Hildebrandt decía en una entrevista televisiva que, de acuerdo con su experiencia —ella ha residido en Venezuela—, para entender a Chávez hay que conocer a los venezolanos. Nosotros diríamos que también hay que conocer a Rómulo Gallegos y a *Doña Bárbara*, y tomar en cuenta Punto Fijo —como la creación del sistema de partidos políticos— y el «caracazo». Pero lo que más nos interesa es averiguar si el proceso político de Venezuela es un modelo clásico populista o se trata de una nueva Cuba; de esto último nos ocuparemos en el presente artículo.

Cuando observamos la historia de Venezuela del siglo XIX, nos damos cuenta de que es similar a la de la mayoría de países de América Latina: la misma disputa por el poder de los caudillos, y de los conservadores y liberales. La Guerra Federal es un ejemplo de ese siglo, así como la figura de Ezequiel Zamora como el héroe que dejó un legado en el pensamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas; él fue la «tercera raíz», junto con Simón Bolívar y su mentor, Simón Rodríguez. Esta lucha política fratricida culminó en 1902 con el golpe de Estado que Juan Vicente Gómez llevó a cabo contra su pariente y amigo, el andino Cipriano Castro y su Revolución Azul. Con Gómez se inicia una larga dictadura que va de 1908 a 1936 y que culmina con su muerte.

Este fue un periodo en el que las salidas democráticas permanecieron selladas, y esto explicará lo tardío que fue el proceso institucional de los partidos políticos. Estos son Acción Democrática (AD) —socialdemócrata,